

Los complejos retos de una ciudad diversa

Santiago de Cali es una ciudad diversa. Varios procesos históricos y complejas dinámicas económicas han hecho de la ciudad un espacio donde, a lo largo de las últimas décadas, ha convergido toda clase de diferencias. Diferencias étnico-raciales ante todo, resultado entre otras cosas de los intensos flujos migratorios experimentados por la ciudad desde los años 60 del siglo XX. Sea por los procesos de desarrollo económico e industrial de unas épocas, sea por los fenómenos de pobreza y violencia de otras, Cali ha sido un importante foco receptor de migrantes, recibiendo importantes contingentes de población afrocolombiana, indígena, blanca y mestiza provenientes de numerosas partes del país.

La diversidad, sin embargo, no se agota en lo étnico-racial. A la multiplicidad de etnias que caracteriza la ciudad, se agregan otros criterios de pluralidad no menos importantes. Diferencias en la cultura por ejemplo, resultado de la convergencia sistemática de diversos credos, creencias, costumbres y manifestaciones culturales. Diferencias, también, en términos de identidades, que aluden a la existencia de distintos marcos de identificación individual y colectiva que pasan por lo local, lo regional, lo étnico-racial y lo sexual. A éstas deben sumársele diferencias del más variado tipo: socioeconómicas, de acceso a bienes y servicios, de capacidades físicas, de participación y representación política, entre muchas más.

Ahora bien, decir que la nuestra es una ciudad diversa no significa afirmar que es, necesariamente, una ciudad que vive en la diversidad. El fenómeno de la pluralidad es una realidad innegable, pero se trata de una realidad que no ha venido acompañada de otra relacionada con una aceptación de tal diversidad. La diversidad se reconoce, pero difícilmente se pasa de este reconocimiento a la idea de una Cali plural en la que todas las diferencias tengan cabida como parte de una misma idea de comunidad. La diversidad, en este sentido, ha derivado corrientemente en una imagen de desigualdad. No es extraño entonces que el fenómeno de la diversidad, y con ella la población que se reconoce como diversa, haya permanecido asociado a una idea de exclusión y exterioridad social. Exclusión económica, reflejada en pobreza y falta de oportunidades; social, en términos de limitación de opciones para superar distintas condiciones de vulnerabilidad; cultural, en el sentido de marginación o rechazo por pertenencias étnico-raciales, sexuales y de otra índole identitaria; política, en relación con la dificultad para acceder a mecanismos y acciones de representación y participación en lo público; y simbólica por cuanto las diferencias no reconocidas, aisladas y rechazadas suponen una exclusión del otro de la idea de comunidad, y en consecuencia, de las nociones de ciudad y ciudadanía.



Visto en estos términos, es posible señalar que el fenómeno de la exclusión social ha venido incrementándose en la ciudad desde tiempos recientes, convirtiéndose en un problema que afecta e incumbe ya no sólo a la población más pobre y vulnerable, sino también a la ciudadanía en general –incluyendo, por supuesto, al gobierno y la Administración Municipal–, enfrentada a la urgente necesidad de repensar la ciudad desde las ópticas de la inclusión, el reconocimiento de la diversidad, y la integración de aquellos cuya condición vulnerable y/o diversa les ha puesto por fuera de los márgenes de pertenencia a la comunidad de ciudadanos.

El problema de la exclusión es, entonces, sumamente complejo, y ha tendido a agravarse durante los últimos años en razón de la crisis económica, el crecimiento del desempleo y el incremento del desplazamiento forzado. Todo ello ha supuesto para la ciudad una serie de retos que aún no han sido del todo resueltos y plantean, todavía, serios desafíos. De integración, reconocimiento y visibilización, como se ha venido señalando, pero también –y quizá de manera más apremiante– de ubicación; de cobertura de necesidades y servicios básicos; de garantía a derechos como la educación, la salud, la seguridad y la recreación; de acceso a canales y medios de representación y participación en lo público; y, entre otras cosas, de ampliación de oportunidades y fomento de capacidades. La construcción de una idea de ciudad capaz de integrar sus componentes más diversos y de vivir en la diversidad, debe pasar necesariamente por la atención a estas circunstancias, frente a las cuales, si bien se han logrado no pocos avances, queda todavía un largo trecho por recorrer.

Atender a estos problemas, en el marco de un esfuerzo general por hacer de Cali una ciudad inclusiva, no es una tarea sencilla. De poco sirve aceptar la idea de una ciudad diversa, o de la existencia de fuertes fenómenos de exclusión y marginalidad, si no se cuenta con un diagnóstico certero que permita caracterizar tales cuestiones, y que por tanto ofrezca una base y un punto de partida para intervenir sobre las mismas. Tanto la diversidad como la exclusión deben ser identificadas, delimitadas, medidas y caracterizadas con el fin de reconocer sus verdaderas dimensiones, así como los distintos factores las afectan tanto positiva como negativamente.

Tal diagnóstico debe ser, pues, el primer paso hacia la construcción de una política social que, desde la Administración Municipal, impulse el camino hacia el reconocimiento e integración de la diversidad y la marginalidad. Dicha política debe permitir que la comunidad caleña pueda pensarse en términos más amplios, viéndose a sí misma como un todo diverso que es mucho más que el agregado de las distintas poblaciones y grupos que la componen. Esto supone, de una parte, transformar el imaginario que los caleños tienen de su ciudad y sus integrantes, pero también –y principalmente– implica recomponer el entramado de relaciones sociales que se teje cotidianamente en la ciudad, donde el fenómeno de la exclusión ve reflejado en una participación precaria en lo público, en una ausencia de lazos y vínculos de solidaridad, en la carencia de un sentido de confianza colectiva, así como en el deterioro de redes sociales tanto entre la población vulnerable como entre ésta y el resto de la comunidad. A menos que este entramado experimente un cambio sustancial, el problema de exclusión en la ciudad continuará preso de un círculo vicioso que seguirá reproduciendo las condiciones objetivas y subjetivas que impiden que la diversidad y la vulnerabilidad se traduzcan en algo distinto a la marginalidad.

Consideraciones como éstas permiten afirmar que la exclusión es un fenómeno multidimensional, y que como tal debe ser pensado y enfrentado por parte de la Administración Municipal. Así como se trata de una problemática que obedece a diversas causas y se manifiesta de diferentes formas, es un fenómeno que amerita ser atendido desde varios frentes y a través de múltiples estrategias. Entre los diversos frentes que, desde este punto de vista, merecen ser intervenidos se encuentran el económico, relacionado con el bajo nivel de ingresos de la población vulnerable; el laboral, asociado a la imposibilidad de esta población para acceder al mercado de trabajo; el social, referido a dificultades de la misma para gozar plenamente de sus derechos; y el cultural, asociado a la segregación simbólica y a la estigmatización de la que ésta es víctima. Todo ello nos habla de un serio problema de pobreza, pero también de una marcada situación de desigualdad –que remite a una amplia brecha en el acceso a opciones y oportunidades–, de una alarmante condición de marginalidad –reflejada en la imposibilidad de un grupo para participar de las esferas de acción que le competen–, así como de un alto margen de vulnerabilidad, entendida esta última como la “exposición a un riesgo por ausencia de capacidades individuales y colectivas” (Ibíd., 31-32).

La respuesta a la exclusión debe ser, entonces, tan multidimensional como el fenómeno. Los esfuerzos gubernamentales por construir una Cali inclusiva no pueden limitarse a los aspectos meramente socioeconómicos, a la manera de un tratamiento asistencialista de la vulnerabilidad y la desigualdad social. Deben, además, plantear una intervención sobre el amplio conjunto de factores –objetivos y subjetivos– que generan precariedad, marginación y destrucción de vínculos y redes sociales, con el fin de debilitarlos. En este sentido, el trabajo de la Administración Municipal debe procurar, además de un mejoramiento de las condiciones asociadas a la pobreza y la desigualdad, una promoción constante y sistemática de procesos de promoción, prevención e inserción social, que permita fortalecer y restablecer lazos y relaciones sociales tanto en las comunidades vulnerables como entre éstas y la ciudadanía en general. Igualmente, dicho trabajo debe propender hacia el fomento de habilidades y capacidades de las personas en situación de vulnerabilidad, con el fin de brindarles las herramientas necesarias para superar tal estado; así como hacia la apertura de espacios e instrumentos de participación pública, de activación de roles personales y comunitarios, y de fortalecimiento de capital humano y social (Ibíd., 29).

Todo lo anterior supone, como referente orientador y articulador de los distintos esfuerzos gubernamentales, una idea de inclusión social entendida como “alternativa de integración para la convivencia social” (Ibíd., 14). Una Cali incluyente e inclusiva ha de ser, desde este punto de vista, una ciudad en la que no haya espacios físicos ni sociales prohibidos o vetados para algunos sectores de la población, donde existan fuertes vínculos de solidaridad social en y entre los distintos grupos que coexisten en el espacio urbano, y en donde sea posible pensar en una ciudadanía efectiva, con garantías de acceso igualitario a los derechos, y con posibilidades reales de organización, participación y acción pública y política. Tal ha sido, precisamente, el derrotero de la Administración de Jorge Iván Ospina, con sus esfuerzos por diseñar un Programa Municipal de Inclusión Social y, por supuesto, con su proyecto de Educación Inclusiva con calidad.